

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2020

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

ACCIÓN:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-016-2018-00006-01
DEMANDANTE:	NÉSTOR ORLANDO HOLGUIN TIRADO Y OTROS targabogadosyconsultores@gmail.com
DEMANDADO:	LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso apelación propuesto por la parte demandada contra el auto interlocutorio nro. 177 proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali en audiencia inicial del 11 de marzo de 2019, mediante el cual se dispuso, entre otras cosas, declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderada judicial, los señores NILIA TERESA BIOJÓ CORTÉS y otros demandaron a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y solicitaron<sup>1</sup>:

- Se declare la nulidad de los oficios nros. SARP-SAJ-0026 del 14 de julio de 2017, SARP-SAJ0027 del 14 de julio de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0326 del 24 de marzo de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0325 del 24 de marzo de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0323 del 24 de marzo de 2017, DS-06-12-6 SAJ-0322 del 24 de marzo de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0402 del 6 de abril de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0403 del 6 de abril , DS-O6-12-6-SAJ-0401 del 6 de abril de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0564 del 26 de mayo de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0584 del 8 de junio de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0327 del 24 de marzo de 2017, DS-06-12-6-SAJ-0579 del 7 de junio de 2017, mediante os cuales la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN negó la petición elevada por los demandantes, tendiente al reconocimiento de la bonificación, creada mediante Decreto 382 del 2013, como factor salarial.
- Se declare la nulidad de las Resoluciones nros. 2-2525 del 18 de agosto de 2017, 2-2542 del 22 de agosto de 2017, 2-1758 del 13 de junio de 2017, 2-1757 del 13 de junio de 2017, 2-2032 del 30 de junio de 2017, 2-2033 del 30 de junio de 2017, 2-2031 del 30 de junio de 2017, 2-2035 del 30 de junio de 2017, 2-2034 del 30 de junio de 207, 2-2070 del 30 de junio de 2017, 2-2071 del 30 de junio de 2017, 2-2349 del 24 de julio de 2017, 2-2545 del 22 de agosto de 2017, 2-1756

<sup>1</sup> Folios 323-324.

del 13 de junio de 2017 y 2-2045 del 30 de junio de 2017, mediante los cuales la Subdirección de Talento Humano de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN dio respuesta al recurso de apelación interpuesto contra los oficios anteriormente referenciados.

- A título de restablecimiento, se declare que los demandantes tienen derecho a que la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN reconozca a su favor la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 382 del 2013, como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y que se causen a futuro.

### III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 177 dictado en audiencia inicial del 11 de marzo de 2019<sup>2</sup>, el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali dispuso, entre otras cosas, declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control frente a la demandante NILIA TERESA BIJOÓ CORTÉS, propuesta por la entidad demandada. Adujo como sustento de su decisión lo siguiente:

*“En el sub – lite, la señora Nilia Teresa Biojó Cortés presentó la solicitud del reconocimiento como factor salarial de la bonificación el 01 de junio de 2017 (Fol. 32). Mediante el oficio No. DS-06-12-6-SAJ-0576 del 07 de junio de 2017, se le negó su petición, este le fue notificado o entregado el 9 de junio del mismo año (Fls. 75-77 c-1). La apoderada de la actora mediante escrito del 13 de junio de 2017, presentó recurso de apelación (Fls. 75-77 c-1). La apoderada de la actora mediante escrito del 13 de junio de 2017, presentó recurso de apelación (Fls. B106-107). Mediante la Resolución No. 2-2045 del 30 de junio de 2017, se confirma el oficio No. DS-06-12-6-SAJ-0576 del 07 de junio de 2017 (Fls. 222-229), acto que le fue notificado el 13 de julio del mismo año (Fol. 229 Vto.). La actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 11 de octubre de 2017 (Fls. 301-310). El Ministerio Público se declaró impedido el 20 de octubre de 2017 y solicitó designación de procurador judicial ad hoc, hecho que no sucedió y por ende no se realizó la conciliación en los términos del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, hecho que le fue notificado el 19 de diciembre de 2017 (Fol. 311), es decir, que cuando la actora presentó la conciliación, esto es, el 11 de octubre de 2017, faltaban un (1) mes y dos (2) días, y como le informaron no poder realizarse la conciliación prejudicial el 19 de diciembre de 2017, la parte actora contaba hasta el 13 de febrero para presentar la demanda, por lo que se advierte que la parte demandante acudió a esta jurisdicción oportunamente, toda vez que su demanda se presentó el 15 de enero de 2018 (Fol. 337). Por lo tanto, no operó la caducidad de la acción en relación con la señora Biojó Cortés”*

### IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La apoderada judicial de la parte demandada impugnó la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad, argumentando que, en el presente caso, operó el término de caducidad, toda vez que éste se debe contabilizar a partir de la fecha en que

---

<sup>2</sup> Folios 384-385.

la demandante fue retirada del servicio, no desde el día en que fue notificado el acto demandado<sup>3</sup>.

## V. TRASLADO DEL RECURSO

La apoderada judicial de la parte demandante, frente al recurso interpuesto por la apoderada de la parte demandada, adujo que lo que se pretende a través de la demanda de la referencia es la nulidad de los actos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, no de los actos que dispusieron el retiro del servicio de la demandante y que, en consecuencia, el término de caducidad debe contabilizarse teniendo en cuenta la fecha de notificación de las decisiones de la Administración enjuiciadas.

## VI. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad, para lo cual habrá de señalarse cuándo opera dicha figura, la manera en que se contabiliza y qué excepciones consagra la ley frente a la misma.

## VII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, establece el término dentro del cual ha de presentarse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, so pena de que opera el fenómeno jurídico de la caducidad, en los siguientes términos:

***“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:***

*(...)*

*2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:*

*(...)*

*d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;*

Sin embargo, el mismo artículo, en su numeral 1º literal c), establece una excepción a la regla, así:

***“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada.***

*1. En cualquier tiempo, cuando:*

*...c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas”.*

---

<sup>3</sup> CD obrante a continuación del folio 387.

En este punto, vale la pena aclarar que los actos que reconocen prestaciones periódicas no solo abarcan las decisiones que reconocen prestaciones sociales, sino también comprenden los actos que reconocen prestaciones salariales que periódicamente percibe el beneficiario, siempre y cuando la periodicidad en la retribución se encuentre vigente.

Dicha interpretación fue efectuada por el Honorable Consejo de Estado en providencia del 24 de mayo de 2012, en la que se resolvió un asunto similar al que nos atañe, y de la cual resulta oportuno traer a colación el siguiente extracto:

*“(…)*

*De conformidad lo anterior, debe indicarse que en razón a que en el caso en cuestión la pretensión del actor se encuentra encaminada a lograr el reajuste de su mesada salarial, y como quiera que al momento de la presentación de la demanda la retribución por la prestación de sus servicios se encontraba vigente, es claro, que sus reclamaciones versan sobre un derecho de goza de total periodicidad.*

*En tal sentido, esta Corporación ha señalado lo siguiente:*

*"La posibilidad de demandar en cualquier tiempo, apunta a los actos que tienen el carácter de prestación periódica, es decir, aquellos actos que reconocen emolumentos que habitualmente percibe el beneficiario.*

*En ese sentido, los actos que reconocen prestaciones periódicas, comprende no solo decisiones que reconocen prestaciones sociales, sino también envuelve los actos que reconocen prestaciones salariales que periódicamente se sufragan al beneficiario, siempre y cuando la periodicidad en la retribución se encuentre vigente.”<sup>4</sup>.*

No obstante, dicha Corporación también ha señalado que, si bien se podrán demandar en cualquier tiempo los actos que nieguen o reconozcan prestaciones periódicas, lo cierto es que éstas pierden tal calidad cuando se presenta la desvinculación del servicio; caso en el cual, surge la obligación de presentar la demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto enjuiciado<sup>5</sup>.

Es menester señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de caducidad. La referida norma preceptúa lo siguiente:

*“Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbadado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente. La improbación del acuerdo*

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 24 de mayo de 2012, Consejero Ponente Dr. **GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN**, radicación número 23001-23-31-000-2011-00025-01 (0914-11).

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 13 de febrero de 2014, Consejero Ponente **LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO**, radicación número 47001-23-31-000-2010-00020-01 (1174-12).

*conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción”.*

### **7.1. CASO CONCRETO**

De conformidad con el artículo 328<sup>6</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>7</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Recapitulando, se tiene entonces que la juez de primera instancia declaró no probada la excepción de caducidad, al considerar que la demanda fue presentada dentro del término legal y que la apoderada de la parte demandada manifestó estar inconforme con dicha decisión, porque, a su juicio, el término de caducidad, en el *sub examine*, debió contarse a partir de la fecha de notificación del acto de retiro y no desde cuando la demandante fue notificada del acto objeto de la presente demanda.

Pues bien, de entrada debe decirse que los argumentos expuestos por la apoderada judicial de la entidad demandada no son de recibo, comoquiera que el artículo 164 del CAPACA señala claramente que, cuando la demanda no verse sobre el reconocimiento de prestaciones periódicas, como sucede en el *sub examine*, hay lugar a aplicar la regla general, conforme a la cual el término de caducidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho vence dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de notificación del acto administrativo demandado. En nada influye, a efectos de la contabilización del plazo legal para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la fecha en la que la parte demandante fue retirada del servicio.

En el presente caso, el acto administrativo demandado, contenido en la Resolución nro. 2045 del 30 de junio de 2017, a través del cual la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN resolvió confirmar en todas sus partes la decisión contenida en el oficio DS-06-12-6-SAJ-0579 del 7 de junio de 2019, que a su vez negó la reclamación del reconocimiento prestacional elevado por la señora NILIA TERESA BIOJÓ CORTÉS, fue notificado el 13 de julio de 2017<sup>8</sup>. Luego, el término de 4 meses para presentar la respectiva demanda comenzó a correr a partir del 14 de julio de 2017.

<sup>6</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>7</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

<sup>8</sup> Folios 222-229.

Faltando 1 mes y cuatro días, se suspendió el aludido plazo, desde el 11 de octubre de 2017 hasta el 11 de enero de 2018<sup>9</sup>, por haberse surtido en ese lapso el trámite de agotamiento de conciliación prejudicial<sup>10</sup>, y el término se reanudó el 12 de enero de 2018, venciendo la oportunidad para radicar la demanda el 16 de febrero de 2018. La demanda fue interpuesta oportunamente el 15 de enero de 2018, por lo tanto no se encuentra probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada.

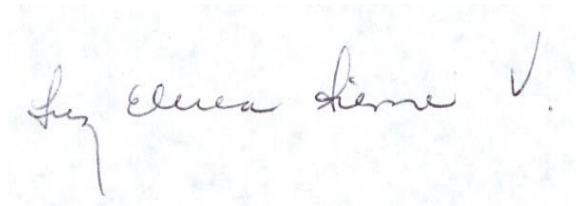
En consecuencia, se

### **RESUELVE:**

**PRIMERO.- CONFIRMAR** el auto interlocutorio nro. 177 del 11 de marzo de 2019 proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali, mediante el cual se dispuso declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control frente a la demandante Nilia Teresa Biojó Cortés.

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** al Juzgado de Origen para que el proceso continúe con el trámite pertinente, cancele su radicación y sin costas en esta instancia<sup>11</sup>.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**



**LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**  
**Magistrada**

---

<sup>9</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, norma según la cual el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, o cuando vencido el término de tres meses no se hubiere celebrado por cualquier causa.

<sup>10</sup> Folios 301-311.

<sup>11</sup> Proyecto: ACH  
VoBo Secretario